

# HACIA UNA COMPRENSIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS DE COLOMBIA DE 1950 A 1990

Luis Francisco Ochoa Rojas\*

## Resumen

El presente artículo hace un recuento sobre las transformaciones políticas en Colombia durante gran parte del siglo XX. En el campo educativo señala las reformas e intereses de los gobiernos a partir de la década de 1950, para darle un viraje a la perspectiva de la educación ya no como elemento formativo, sino como preparación para el entorno productivo. He allí el énfasis de los temas económicos con los cuales y extensamente inicia la disertación.

## Palabras clave

Economía, reforma, planificación educativa.

## Abstract

## Key words

---

\* Licenciado en Psicología-Pedagogía, Magíster en Educación. Docente de la Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás.

Durante la segunda década del presente siglo la industria colombiana experimentó un acelerado crecimiento, debido entre otras cosas a la política económica desarrollada por el general Pedro Nel Ospina (1922-1926), la cual propició un clima de confianza para los inversionistas tanto nacionales como foráneos. “En 1927 Bogotá tenía 200 fábricas, Medellín 117, Barranquilla 91, Cali 97 y en otras ciudades donde la industria no existía una década atrás, se instalaron unas 75 factorías” (Bejarano, 1980: 24). En cambio la agricultura no experimentó variaciones, excepto en el cultivo del café.

Las transformaciones planteadas en el sector industrial generaron procesos de gran significación, como la demanda en gran escala de mano de obra del sector campesino motivado por los salarios ofrecidos, que a su vez produjeron una inmigración campo-ciudad. Este aumento de la población en las ciudades, estimuló la demanda de productos alimenticios y por ende la comercialización de los mismos, “los precios de los productos agrícolas se dispararon hacia arriba, y el Congreso aprobó la célebre «Ley de Emergencia» en 1926 autorizando la supresión por reducción de los derechos de aduana que pasaban sobre los productos alimenticios” (Molano y Vera, 1982: 25).

En los comienzos de 1928 nada indicaba que pudiera producirse un desbarajuste económico, pues la economía en general marchaba prósperamente; no obstante al año siguiente “los síntomas de una crisis de hondas repercusiones comienzan a hacerse sentir inequívocamente. Los préstamos e inversiones norteamericanas se detienen bruscamente y en consecuencia los trabajos de obras públicas que venían adelantándose se afectan en idéntica proporción” (Molano y Vera, 1982: 34).

La crisis mundial de 1929 se manifiesta en la baja de los precios del café, de tal manera que “en 1929... el país recibió por 2.800.000 sacos de café exportados la suma de 75 millones de dólares, en 1930 por 3.200.000 sacos recibió apenas 60 millones de dólares” (Melo, 1978: 77). Este fenómeno

no en compañía de los citados más arriba trastornó el ritmo de marcha de la economía con repercusiones en el orden social: despido de miles de obreros de las obras públicas, muchos de esos trabajadores regresaron al campo generando nuevas tensiones en el sector agrario: desarrollo de movimiento obrero y campesino de agitación y protesta social; invasión de tierras de los latifundistas por parte de trabajadores agrarios; conflicto obrero-patronal en el sector industrial; estrechez económica en la clase media y agitación estudiantil universitaria. Desde otra perspectiva la inversión en la industria y en las obras públicas decrece, y el mercado de los bienes de consumo se vuelve recesivo, los salarios se reducen, la jornada de trabajo se incrementa y disminuye la demanda de los insumos industriales. El Partido Conservador que había gobernado al país casi por medio siglo, no puede afrontar con pericia estos acontecimientos y lo que hizo fue recurrir a la represión, dando como resultado la matanza de campesinos en la zona bananera y la muerte de un estudiante en los sucesos del 8 y 9 de junio de 1929. El gobierno de Abadía Méndez cayó en desprestigio y el Partido Conservador se dividió. La Iglesia Católica que generalmente había dictado las líneas generales de la política conservadora no acierta a salvar al partido de su derrumbe. Esto lo aprovechan los liberales para arrebatar sus críticas sobre el partido gobernante y propicia su retorno al poder con Olaya Herrera.

Con la victoria liberal en las elecciones de 1930, Enrique Olaya Herrera asume el poder. A pesar de esto, el Congreso sigue siendo de mayoría conservadora y desde allí ofrece una oposición sistemática al gobierno. Así mismo las repercusiones de la crisis mundial dificultan la ejecución del programa de reformas liberales que se habían prometido. “En efecto entre 1928 y 1933 el país experimenta una doble crisis económica” (Palacio, 1939: 310). De una parte la caída de los precios del café y la suspensión del crédito y la inversión foránea. “Si bien las exportaciones de café se vieron afectadas, la devaluación permitió mantener a los exportadores su tasa de ganancia y

los ingresos de divisas lograron suplir la demanda industrial” (Palacio, 1939: 31).

La economía del país comienza su recuperación hacia 1934, la cual se constituirá posteriormente en una de las mayores escaladas de industrialización de la historia económica de la nación; Bejarano (1980) anota que la tasa de crecimiento por estos años se mantuvo en 10.08%. En otras palabras, realmente en este periodo se inicia la industrialización del país.

López Pumarejo asume el poder en 1934 con el respaldo del partido liberal, en el que se notaban algunos sectores socialistas. El Congreso, totalmente liberal por el abstencionismo conservador, facilita la labor del gobierno. El presidente López gozaba de amplio respaldo de los diferentes sectores y era considerado como un gran ideólogo y un eficiente administrador. Tuvo en cuenta dentro de su gestión las presiones del sector industrial, las peticiones de los exportadores, las luchas reivindicativas de los campesinos, la exigencia de intervención del Estado por parte de los obreros en la negociación de sus demandas, las clases medias que se iban formando y que pedían reconocimiento y participación social y política; con un manejo excepcional de este conjunto de fuerzas opuestas divergentes inicia y desarrolla su gobierno de la “Revolución en Marcha”.

Como se dijo antes, la industria crece en gran medida, “la producción industrial se duplica entre 1931 y 1938; en 1939 existían en el país 4.467 empresas industriales, la mitad de las cuales habían sido fundadas entre 1930 y 1939; y 1.764 fueron posteriores a 1935” (Bejarano, 1980: 49), esto refleja una época de bonanza y de esperanza, que hará que la nación tenga una sustancial elevación de la calidad de vida. La mayor parte de las empresas eran productoras de bienes de consumo.

De otra parte el Partido Liberal venía haciendo crítica de la constitución de 1886 y cuando llegó al poder López Pumarejo se vio la oportunidad de reformarla. La fundación en 1935 de la CTC (Confederación de Trabajadores de Colombia) a ins-

tancias del liberalismo, favoreció la organización obrera. La “Ley de Tierras” de 1936 apoyó las reivindicaciones campesinas contra los terratenientes, conservadores en su mayoría, en una reforma agraria sin precedentes.

Entre 1938 y 1945 la industrialización y el aumento de la población urbana continuaron. Anotan Molano y Vera:

La industria durante el período de 1940 a 1945 conoció grandes progresos estimulados por las nuevas funciones asumidas por el Estado en relación con la economía y por las limitaciones impuestas por la guerra al cerrarse algunos mercados de importación. Así en estos años se crearon 3.445 empresas industriales fundamentalmente dedicadas a la producción de bienes de consumo, pero también de bienes intermedios y de capital (Molano y Vera, 1982: 98).

Hasta 1945 la mayor parte de las inversiones en la industria pertenecían a capitales nacionales, ya en la postguerra se inició una fuerte inyección de capital norteamericano.

En el terreno político se agudizan las contradicciones entre liberales y conservadores. El conservatismo en una política de oposición férrea y de abstención total, con el fin de generar división del liberalismo y al mismo tiempo socavar la imagen del gobierno liberal, alega que detrás de las políticas reformistas se encontraba la sombra del comunismo. Esta estrategia surtió efecto, pues el partido se dividió en el ala derecha de corte moderado, liderada por Gabriel Turbay, sector apoyado por industriales y financistas que ya no veían con buenos ojos el proceso de reformas. El ala izquierda de corte populista y socialista liderada por Jorge Eliécer Gaitán, caudillo de origen popular que propugnaba por la reivindicación total de las clases pobres y fustigaba al sector oligárquico en general y el de su propio partido, lo cual llevó a López Pumarejo a renunciar un año antes de cumplir su período; en su reemplazo el Congreso nombró a Alberto Lleras Camargo. Dentro de este segundo periodo, López Pumarejo no

tuvo el manejo que había lucido en su primer mandato y su desprestigio aumentó cuando se le acusó de cohecho de negocios corruptos, entre los cuales estaba su propio hijo Alfonso López Michelsen en el “negociado de la Handel”.

Después de la Segunda Guerra Mundial, en particular el período de 1945 a 1950, la economía fue excepcionalmente favorable. “La industrialización llegaba a su edad adulta al lograr un alto grado de diversificación basado en la reposición y ampliación del capital fijo. A este resultado contribuyó la sensible mejoría de la capacidad para importar, que pasa de unos 1.200 [millones de dólares] en 1950 según la CEPAL” (Citado por Molano y Vera, 1982: 119).

En 1946 el liberalismo se presenta dividido en las elecciones y ello permite que el Partido Conservador asuma el poder unido bajo el nombre de Mariano Ospina Pérez. No obstante, el partido liberal gana las elecciones parlamentarias, lo que obliga al presidente Ospina a llamar al liberalismo a colaborar en el gobierno. “Esta colaboración fue sumamente accidentada y el conservatismo terminó el cuatrienio gobernando sólo, mientras el liberalismo declaró la abstención” (Molano y Vera, 1982: 119).

Este periodo ha sido uno de los más agitados de la historia nacional, ya que en 1948 fue asesinado el caudillo Jorge Eliécer Gaitán, lo cual fue parte de un proceso en espiral de violencia partidista que causó miles y miles de muertos, hambre y dolor en muchos hogares humildes de Colombia. Las reformas que habían surgido en el periodo liberal sufrieron un cambio debido al viraje ideológico impuesto por el conservatismo, aunque se mantuvo la tendencia de adecuación a las exigencias del desarrollo económico. Esta situación obliga a la abstención del partido liberal en las elecciones de 1950, además de las acusaciones del montaje de un posible fraude electoral por parte del gobierno.

Laureano Gómez es elegido presidente en 1950. Su proyecto político era totalmente antagónico al

de López Pumarejo, y por eso, desde el poder desarrolla una serie de estrategias con el fin de abrirle paso a una reforma constitucional de corte corporativista, que contenía una concepción política de ultraderecha.

Desde el punto de vista económico “la industria acusa durante el periodo de Gómez una tendencia hacia la recesión, debido a la devaluación causada por una gran expansión del crédito bancario, a las dificultades para importar materias primas que creó la guerra de Corea, y a liberación de importaciones que decretó el gobierno para hacer frente a estos dos últimos fenómenos” (Molano y Vera, 1982: 134). A pesar de lo anterior se obtuvieron aumentos en el capital fijo y la diversificación en la producción continuó su ritmo. El sistema agrario fue golpeado por la violencia y también modificado por la aparición del comercio agrícola. Estos dos factores generaron la ampliación de la migración campo - ciudad por la expulsión de campesinos de sus tierras, debilitando según algunos autores (Cf. Molano y Vera, 1982) el sistema de latifundio.

Con el propósito de analizar los factores de desarrollo económico y hacer recomendaciones al gobierno para su ejecución, en 1950 viene una misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF, conocido más como la Misión Currie. La preocupación fundamental de la Misión consistía en el diseño de un plan para elevar la calidad de vida de la población. Realizado el estudio las sugerencias dadas giraban alrededor de la elevación de la capacidad productiva y de la producción misma.

En medio de estas circunstancias el régimen laureanista se hacía cada vez más reaccionario, con un muy marcado énfasis de imposición de ideologías de derecha a través de las políticas de gobierno. El liberalismo se había unido pero estaba virtualmente afuera de la esfera política nacional, sus máximos dirigentes habían sufrido atentados en 1952 lo que obligó a su exilio del país. La reforma constitucional que promovía Gómez producía inquietud ya que dentro del proyecto

corporativista del Estado, la oposición política y la influencia de los partidos distintos del régimen quedaría gravemente limitada. Tal sería el estado de las circunstancias, que la facción moderada del conservatismo liderada por Ospina Pérez, quitó su apoyo a la gestión de Gómez y comenzaron a buscar para la sucesión presidencial un líder menos reaccionario. “El rompimiento entre Ospina y Gómez, los líderes más importantes del partido, se produjo en abril de 1953. Gómez criticó ácidamente la política seguida por Ospina el 9 de abril de 1948, este respondió calificando al régimen de Gómez de totalitario” (John Martz, citado por Molano y Vera, 1982: 15).

La violencia se intensificaba y extendía más y más, lo cual hacía prever una guerra civil. El apoyo que tenía el régimen era tan sólo de las Fuerzas Armadas, y era ya casi imposible para éstas controlar la rebelión surgida en los Llanos orientales y el levantamiento de 60.000 campesinos en el Tolima. A pesar de esta situación, Gómez convocó a la Asamblea Constituyente, pero días antes de que comenzara a sesionar, el General Gustavo Rojas Pinilla le dio golpe de Estado a Gómez, argumentando “tremenda crisis”. Este hecho fue apoyado por el partido liberal y por el sector moderado del conservatismo.

La alegría y las esperanzas que había despertado Rojas Pinilla se fueron debilitando, pues fue sucesivamente posponiendo las elecciones y se fue asentando en el poder. Los partidos políticos le quitan su apoyo poco a poco, los empresarios a pesar de la bonanza cafetera se sentían incómodos por las políticas económicas y fiscales que el General planteaba. La pérdida del apoyo inicial trata de ser recuperada a través de medidas populistas fundando el Movimiento de Acción Nacional (MAN) y SENDAS. En síntesis lo que en un principio se dio como un arbitraje de las Fuerzas Armadas del conflicto político, posteriormente se comenzó a interpretar como una peligrosa dictadura. Esto llevó a que los partidos en conflicto se unieran en contra de Rojas, así como los bloques económicos. Lo anterior condujo a la caída del régimen en mayo de 1957. El panorama que se presentó fue muy claro “la política seguía por cuen-

ta de los partidos mientras una Junta Militar de cinco miembros, presidida por el general Gabriel París, se constituía en una simple administradora de la economía” (Sánchez, 1989: 164).

Es importante señalar que el gobierno de general Rojas en cambio de dar un rumbo nuevo al País; propició con sus dictadura la unión de los grupos dominantes, es decir, las élites socioeconómicas representadas por los partidos tradicionales (conservatismo y liberalismo) y con ello consiguió mantener la hegemonía que se veía amenazada por la irrupción de nuevas fuerzas y por la violencia que estos mismos grupos habían alentado dentro del campesinado. Por lo tanto es comprensible que el origen del Frente Nacional tenga que ver con el Pacto de Benidorm de julio de 1956 y el acuerdo de Sitges de 1957, provincias españolas donde se diseñaron las estrategias políticas entre Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez para sacar a la nación del abismo institucional que las clases dirigentes habían generado. El planteamiento fundamental de esta unificación se conoció como Frente Nacional, proponiendo gobiernos coaligados y alternados por un término de cuatro periodos presidenciales. Esto se llevó a consulta popular y fue ampliamente favorable. “En favor de la reforma constitucional votaron 4.169.294 colombianos, sobre un total de sufragantes de 4.397.090 en contra del establecimiento de la reforma constitucional se presentaron 206.864 votos que corresponden al 4.7% del total” (Silva, 1989: 205).

Con la legitimación dada en el plebiscito y con una constitución reformada, el gobierno de Alberto Lleras (1958 - 1962) apunta hacia la pacificación y el desarrollo. En este gobierno el aspecto económico en el sector externo, se caracterizó por una mediana estabilidad dentro de una gran escasez de medios de cambio internacional. La industria tuvo un excelente comportamiento que no auguraba crisis. Se logra crear cerca de cuarenta mil nuevos empleos y un crecimiento promedio anual de 3.9%. “El crecimiento en los precios es moderado (5% anual para los precios al por mayor de bienes manufacturados y el 6.6% para consumidor obrero), lo que permite un incremento real

en la capacidad de compra de los colombianos” (Gaviria, 1989: 177). El proceso de diversificación industrial se acentúa; y al mismo tiempo la sustitución de la oferta internacional por la producción local, hace que se introduzca tecnología cuya ingeniería de recursos es distinta a la habitual en el país; de esta manera los tamaños de escala y el flujo de capital que se necesitaban, se convertían en unidades de producción sobre diseñadas con respecto a las necesidades del mercado nacional. Esto generó un proceso de monopolización, pues ante la brecha tecnológica que se estableció entre las industrias que incorporaron “modernas” tecnologías y las que seguían operando con tecnologías “viejas”, había una competencia altamente desigual, lo que provocaba la concentración del mercado y la producción en las industrias más modernas.

En el sector agrario, donde durante los últimos diez años (1948-1958) se había venido desarrollando la violencia política –en términos económico-sociales era la lucha por la tierra- conquistada para la vía de producción capitalista. La apropiación de las mejores tierras como fuente de abastecimientos para el sector industrial, no vislumbraba cambios significativos en relación con la propiedad de la tierra. Sin embargo de manera extraña la clase dirigente del país acoge la propuesta norteamericana de la Reunión de Punta del Este (Uruguay), en la cual, los países latinoamericanos se comprometen a efectuar una reforma agraria con el fin de eliminar las condiciones objetivas que llevarán a proceso de cambio revolucionario tal como sucedió en Cuba. De lo anterior se deriva la fundación del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), institución en la cual “la reforma agraria impulsada bajo su tutela, fue más una política de fomento que un instrumento para modificar la estructura de propiedad en el campo” (Gaviria, 1989: 186).

En el siguiente periodo presidencial (1962-1966), Guillermo León Valencia llevó a cabo una política diferente a la de su antecesor Alberto Lleras, con respecto al manejo del orden público y en particular el manejo de la insurrección armada. Su

planteamiento fue en cuadrar el problema de la insurrección en términos de “conflicto este-oeste” y por lo tanto considerar que la violencia guerrillera heredada desde los cuarenta y cincuenta, era una estrategia del comunismo internacional. “Inspirado en las tesis de Álvaro Gómez Hurtado y los planteamientos del general Alberto Ruiz Novoa, el presidente Valencia encuadró los conflictos domésticos en el contexto de la confrontación este-oeste, es decir, entre la democracia burguesa liberal y el comunismo, y se propuso eliminar las manifestaciones domésticas de esa ideología” (Silva, 1989: 225).

Con respecto al manejo del Estado diseñó una política llamada la “milimetría”, que consistía en repartir la burocracia estatal a todo nivel, con respecto al reparto de fuerzas políticas en los organismos colegiados (Congreso, Asambleas y Concejos).

En el terreno económico se desató una aguda crisis económica, “el crecimiento en el índice de precios pasó del 4.3% en el año de 1962 a 27.2% en 1963” (Silva, 1989: 227). Las reservas internacionales bajaron en gran medida y los precios del café cayeron. Esto llevó al gobierno a solicitar al Congreso autorización para aplicar una devaluación masiva, tal como había sido recomendada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). El conjunto de estas circunstancias generó protesta y agitación de todos los sectores, y como respuesta Valencia aumenta el poder disuasivo de la represión armada, a través de las fuerzas militares, para recuperar en algo la estabilidad. El congreso debido a disputas políticas no tramita con celeridad las medidas del gobierno y éste muy debilitado, entre la espada y la pared, tiene que recurrir a medidas de excepción como el “Estado de Sitio” para legislar por decreto en el campo económico. Se da así un exceso de presidencialismo, lo cual desencadena un debate político sobre el alcance de los mecanismos de intervención de la economía que posee el Estado. Este debate concluyó en el establecimiento de una normatividad distinta en la Reforma Constitucional de 1968.

La violencia “bandolera” culmina hacia 1965 con la muerte de Efraín González, sin embargo se consolida al mismo tiempo la oposición de una insurgencia guerrillera desconocida antes.

Los enfrentamientos con las organizaciones campesinas impulsaron la reactivación de los grupos guerrilleros rurales, que ante la ofensiva de las fuerzas militares, defensoras del régimen, decidieron optar por el camino de la lucha permanente. Concretamente las FARC surgen en esa coyuntura y de la toma militar de Marquetalia en el primer semestre de 1964. Pero los grupos guerrilleros también se gestaron al calor de la lucha estudiantil y de la inspiración de la Revolución Cubana. En 1965 inicia operaciones el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de inspiración castrista, que ve reforzada su capacidad ideológica con el posterior ingreso del cura Camilo Torres. Entre 1964 y 1965 se gesta el Ejército Popular de Liberación (EPL), inspirado en la guerra de guerrillas campesinas de la revolución china que orientó Mao Tsé Tung en los años cuarenta y como producto de un rompimiento interno del Partido Comunista Colombiano (PCC). Estos grupos armados revolucionarios son una manifestación política bien distinta a los guerrilleros campesinos liberales y comunistas del decenio de los cincuenta (Silva, 1989: 230-231).

Para el periodo 1966-1970 es elegido presidente Carlos Lleras Restrepo. Lo primero que tuvo que atender este gobierno, fue la grave crisis económica que venía de tiempo atrás. Esto llevó a solicitar ayuda al FMI, quien aceptó dar un préstamo de 60 millones de dólares y al mismo tiempo ofreció una serie de “recomendaciones” entre las cuales estaba aplicar una devaluación masiva<sup>51</sup>. Los

gremios y la población estaban prevenidos contra esto, por lo que habían vivido en el periodo de Valencia (1962-1966) y sobre todo por la campaña que había hecho el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), con Alfonso López Michelsen a la cabeza, de que una de las primeras medidas que haría Lleras sería decretar una devaluación. De otra parte las condiciones que imponía el FMI comprometía también otras medidas del programa económico que Lleras había presentado la campaña electoral. Ante esta situación el gobierno se enfrenta al FMI y no acepta las recomendaciones dadas, con ello el presidente amplía el apoyo político a su gestión y se abre el camino para desarmar a sus opositores. Como resultado de este enfrentamiento el equipo económico del gobierno, más técnico que politiquero, desarrolla otras medidas distintas a la devaluación para salir de las dificultades económicas. Esta política es aceptada unánimemente luego por los organismos internacionales, reflejándose posteriormente en un elevado flujo de crédito hacia el país. La crisis que se había manifestado en el sector cambiario, se alejó, y dio paso al impulso de la promoción de las exportaciones con el fin de hacer que la economía del país dependiera cada vez menos del café; “cuyo volumen de divisas pasa de representar cerca del 60% de las exportaciones totales para 1970” (Gaviria, 1989: 183). La reglamentación de las inversiones extranjeras se inicia con el llamado “Estatuto cambiario”, el cual estableció incentivos fiscales al capital externo, así como “un control especial en función de los efectos esperados sobre el aparato económico, regulando de paso la remesa de utilidades y los flujos de divisas por regalías, marcas, asistencia técnica, etc.” (Gaviria, 1989: 184).

Después de muchos debates y tensiones políticas, el Congreso en 1968 aprueba la Reforma Constitucional propuesta por el gobierno, en donde paradójicamente se le recorta poder al Congreso en favor del Ejecutivo; se considera que esto sucedió debido a la miopía de los congresistas para ver lo macro de la propuesta política de la reforma, concentrándose en aspectos como los

<sup>51</sup> Es importante tener en cuenta que siempre que el Fondo Monetario Internacional hace préstamos a los países del tercer mundo, “recomienda” medidas económicas que son de responsabilidad interna de las naciones. Es un intervencionismo abierto en los asuntos internos de los países para favorecer los intereses de los dueños de las finanzas internacionales, que corresponden a los países más desarrollados quienes son los que imponen las reglas.

*auxilios parlamentarios*<sup>52</sup> y las cuotas regionales de representación en el parlamento. De esta forma se generó la descentralización administrativa en la rama ejecutiva que produjo la fundación de una inmensa cantidad de institutos descentralizados. De otra parte la reforma contenía en algunos aspectos, medidas que señalaban la ruta de un juego político más libre que, no obstante, lo que en el fondo consiguió fue perpetuar la hegemonía de los dos partidos tradicionales en la coalición frente-nacionalista. “En la práctica, la reforma de 1968 dio vigencia permanente a la democracia restringida, que era un sistema político supuestamente transitorio y concebido como terapia para resolver unos problemas específicos de violencia bipartidista” (Silva, 1989: 246).

En el último año de la administración Lleras Restrepo se dieron una serie de escándalos entre funcionarios el gobierno y un parlamentario, escándalo que tocó al propio mandatario y a los intereses de las jerarquías políticas en lo referente a las elecciones de abril de 1970. Había nerviosismo y expectación en las clases dirigentes, por el avance político de la Alianza Nacional Popular ANAPO, al mando de Gustavo Rojas Pinilla y por la utilización oportuna de las críticas al gobierno desde diversos sectores por parte del General, canalizando de este modo, para sí, el favor popular.

Las elecciones de 1970 fueron las más agitadas y dramáticas del Frente Nacional; el candidato de la coalición liberal-conservadora, Misael Pastrana Borrero, poseía un lenguaje vago y poco comprometido con los intereses de los sectores populares, mientras que Rojas Pinilla agitaba banderas populistas que se oían bien entre la población humilde, pero carentes de estructura dentro de un programa político. Los sectores más conservadores del “establecimiento” veían con preocupación el desgaste de los partidos tradicionales, su descrédito en las clases populares, el peligro que representaba el ascenso de Rojas Pinilla al poder y la consecuente caída del Frente Nacional.

<sup>52</sup> Esa fue la “zanahoria” que Lleras le puso al Congreso para la aprobación de la Reforma.

El resultado en las elecciones dio como ganador a Pastrana Borrero por un margen tan sólo de 63.575 votos, es decir del 1.6%. La ANAPO acusó fraude y el gobierno ante las protestas del 21 de abril en las distintas ciudades del país, censuró a los medios de comunicación, declaró la ley seca y el toque de queda, además que puso bajo arresto domiciliario a los dirigentes de la ANAPO y militarizó varias ciudades. A pesar de las explicaciones posteriores sobre cómo fue elegido presidente Pastrana, ha quedado una sombra de duda sobre la legalidad de dicha elección.

Resultado de esta difícil y vergonzosa página de la historia, fue la aparición pocos años después del movimiento 19 de abril M-19, cuyos componentes acusan a la clase política tradicional y a la élite oligárquica que siempre ha manejado los intereses económicos de Colombia desde su aparición como república, de ser los autores del robo de las elecciones de 1970, frustrando una vez más los intereses populares.

El proyecto político de Pastrana Borrero, fue una respuesta a los fenómenos y realidades expresadas en el proceso electoral. Era evidente que el Frente Nacional había sido incapaz para movilizar y satisfacer las esperanzas en los sectores populares urbanos, nacidos de las migraciones campo ciudad en las décadas de 1940 y 1950. El divorcio entre estos sectores de población y el bipartidismo, hacían peligrar la continuación del régimen político vigente. A esta coyuntura intentaría responder la administración Pastrana Borrero. La reforma urbana y el plan de las Cuatro Estrategias buscaban transformar el régimen de propiedad de la tierra urbana e incentivar aceleradamente la construcción de viviendas en las ciudades grandes, esto como una primera estrategia para abrir nuevos puestos de trabajo para la mano de obra no calificada; ello afectaría poderosamente el sistema económico reactivándolo.

El esfuerzo de esta tarea fue dejado al sector privado, el Estado apoyaría en la parte de infraestructura de obras públicas en las zonas urbanas. En el sector agrario la estrategia apuntaba al au-

mento en la producción comercial y en gran escala la de los alimentos, evadiendo así el problema de la reforma agraria de la economía campesina. Otras medidas desarrolladas fueron el establecimiento para la financiación de la construcción la Unidad de Poder Adquisitivo Constante UPAC, el plan del “carro popular” (Renault 4), los acuerdos del Grupo Andino, la reforma universitaria, etc.

Colombia tuvo en esa época una mejoría sustancial en el intercambio comercial, las exportaciones menores siguieron aumentando ante la elevación de sus precios en dólares en el mercado internacional. La balanza de pagos se fortaleció entre 1971 y 1973 debido al aumento de las exportaciones y a un mantenimiento en el índice de las importaciones. De esta manera, “el gobierno pudo incrementar las reservas internacionales brutas hasta 524 millones de dólares, equivalente a 3.8 meses de importaciones de bienes y servicios, con un flujo neto de capitales moderado que permitió reducir los indicadores macroeconómicos de endeudamiento externo” (Perry, 1989: 190-191).

Dicho mejoramiento se vio abruptamente interrumpido en 1975 por los efectos de la recesión internacional y el alza de los precios del petróleo, que llevó al nuevo gobierno de Alfonso López Michelsen (1974 - 1978) a tomar medidas contraccionistas con el fin de frenar la inflación. Hacia 1976 las heladas del Brasil que se dieron al mismo tiempo del alza del ciclo cafetero, elevó los precios del grano “a niveles aún superiores a los de la bonanza de 1950 – 1954, en términos reales. Los términos de intercambio del país mejoraron en un 40%, tanto en 1976 como en 1977, y se mantuvieron entre 1978 y 1980 aproximadamente a nivel de 1976” (Perry, 1989: 192-193).

Este aumento del ingreso por exportaciones permitió tener un superávit en la balanza comercial hasta 1979; sin embargo “se revela con claridad una de las características centrales de la clase dominante colombiana: su incapacidad de vivir el presente como el futuro, de conducir un proceso

social y económico dirigido a garantizar un mejor bienestar de la población, lo que constituye al fin y al cabo, una de las fuentes de legitimidad histórica y política” (Camacho y Guzmán, 1986: 83). Los beneficios de esta bonanza no se encaminaron a enfrentar los problemas más apremiantes de la población, esto debido a que sus efectos sólo llegaron a los sectores productores de dicha bonanza: el gremio cafetero.

El presidente Alfonso López Michelsen, bajo cuyo mandato se manifestaron con más fuerza esas bonanzas, reconoció la incapacidad del Estado para regular su distribución, al afirmar que el carácter privado de la actividad que las generaba, impedía la intervención estatal distinta a la de intentar una acción marginal, destinada a acumular divisas que posterior y eventualmente sirvieron para suavizar la situación de «destorcida» (Camacho y Guzmán, 1986: 83).

En 1981 durante la administración del liberal Julio Cesar Turbay, las tendencias de crecimiento del país se rompen, el cambio se atribuyó a la caída de los precios del café desde 1980; y por la limitación en las cuotas del pacto internacional de venta del grano. De lo anterior sigue un periodo de recesión prolongará hasta 1985.

De otra parte, desde mediados de la década de 1970 y como producto del tráfico de narcóticos, se comenzó a dar una movilización social en algunas partes del país (Costa Atlántica, Antioquia, Valle y Bogotá especialmente), que rompieron la unidad de mando de las clases dominantes por tradición, además, llevó a una inundación del comercio suntuario que contrastaba con la población indigente que había aumentado desde la década de los sesenta.

El sector industrial entre los años 1975 y 1990 debilitó su avance, pero al mismo tiempo el sector financiero creció enormemente con la especulación de los dineros hasta límites escandalosos culminando en algunos casos con quiebras y afectando a cantidad de ahorradores.

La subversión armada multiplicada por la aparición de nuevos grupos, la violencia del narcotráfico, la violencia común, la formación de comunidades con la cultura de la violencia por miseria y desprotección estatal, la pérdida de la fe en la Iglesia Católica, el cambio gradual del país campesino a país de ciudad, la aparición de una nueva cultura popular, las alegrías conseguidas por triunfos deportivos internacionales, la formación de organizaciones de lucha regional popular, la ampliación del sector informal de la economía, la búsqueda de formas nuevas y diferentes de organización jurídico-políticas a través de una Asamblea Nacional Constituyente; en fin, una innumerable cantidad de elementos nuevos afectaron el país en el plano interno y externo, llevándolo a replantear las condiciones de nacionalidad y de futuro de la población colombiana. A diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica y el Tercer Mundo, en Colombia no existe pobreza general, lo que acontece es una concentración desmesurada en la riqueza, según Bejarano citado por Tirado Mejía:

(...) en términos de nivel de vida, mientras en 1964 el 25% del total de la fuerza de trabajo (el 24,6% de la fuerza de trabajo urbana y el 25,4% del rural), estaban por debajo de la línea de extrema pobreza, porque éramos un país subdesarrollado; ahora que somos un país de mediano desarrollo, estos porcentajes se han elevado para 1973 a 50,7%, 43,4% y 67,5%, respectivamente. Cálculase que para 1975, el 43% de la población no alcanzaba al mínimo de subsistencia y que el 30,6% de la población total era considerada francamente indigente (Tirado mejía, 1989: 400)<sup>53</sup>.

Por lo tanto es comprensible la frase tan repetida en los gremios “la economía anda bien y el país va mal”; y causa extrañeza ver cómo el sistema político, tan endeble, se sostuvo desde el Frente Nacional, pues los partidos políticos y la clase dirigente en general, no supieron aprovechar la co-

yuntura de unidad nacional dada en 1957 para haber realizado las reformas sociales en los distintos órdenes y niveles, que hubieran permitido un desarrollo óptimo y más equitativo de la población general; lo cual generó a lo largo de tres décadas, incredulidad, decepción y apatía política hacia los partidos tradicionales, situación que permitió el surgimiento de nuevas fuerzas alentando las expectativas por parte de grupos y propuestas distintas del bipartidismo tradicional.

En la década de 1990 el presidente César Gaviria Trujillo (1990 - 1994), continuando con una idea que se empezó a gestar en el gobierno de Virgilio Barco (1986 - 1990), planteó una política de apertura general tanto en el terreno político, como el económico y el educativo. En síntesis se pretende dejar que la iniciativa privada propia de la sociedad civil, emprenda tareas de crecimiento y mayor dinámica a la economía, haciendo que disminuya la acción del Estado y por ende la carga fiscal deficitaria; así mismo permite que el país se introduzca de lleno en la competencia económica internacional, influyendo en la mentalidad de la población en términos de creatividad, ingenio, desafío y movilidad productivas. De otra parte, como resultado de la reforma constitucional, las elecciones para elegir nuevo congreso puede abrir nuevos caminos para una toma de decisiones que favorezcan más al país nacional y con ello Colombia pueda cumplir dignamente con su destino histórico.

## Planes de desarrollo y políticas educativas de 1950 a 1990

### Relación entre educación y desarrollo

Tal como se dijo anteriormente, el concepto de “desarrollo” está relacionado con las nociones de progreso científico-tecnológico. Estas relaciones son de orden teórico y práctico: teórico bajo las argumentaciones de los discursos que defienden el crecimiento de las sociedades, mediante el

<sup>53</sup> El modelo económico neoliberal ha desnudado que el país es subdesarrollado, contrario a lo afirmado por Bejarano.

dominio material de la naturaleza que se expresa como productividad; en el orden práctico mediante el dominio tecnológico de la realidad material. En estos dos ámbitos, la educación se concibe como un insumo del proceso que cualifica a los grupos humanos para el ejercicio de la productividad. Por ende, la educación se convierte en una inversión de capital productivo que se manifiesta como potencial productivo, es decir “capital humano”. De esto se desprende entonces, que en los procesos de desarrollo de los países “subdesarrollados” es requisito indispensable multiplicar, expandir e intensificar la educación en sus diversas formas y niveles, a fin de capacitar y formar la mano de obra que aumentará la producción de estas naciones.

El “Desarrollo” como estrategia internacional se traslada a los países del “Tercer Mundo” como “*Plan de Desarrollo*”, en el cual se fijan políticas generales y sectoriales, siendo la Política Educativa una de estas. Dichas políticas se operacionan a través de programas y proyectos, en otras palabras, se introduce el ejercicio de la planificación, la cual, a partir de la aplicación de ciertas normas, principios metodológicos y procedimientos técnicos que provienen de investigaciones reconocidas como “científicas”, instrumentalizan y ponen en práctica las políticas nacionales de cada sector, las cuales están en consonancia con las determinaciones de los “Organismos Internacionales”, tales como Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) Organización Mundial del Comercio (OMC) que a su vez expresan la voluntad de los Bloques de Poder.<sup>54</sup>

### Proceso de la planificación educativa en Colombia

Colombia intentó por primera vez adecuar un Plan de Desarrollo a principios de la década de 1950. Éste fue auspiciado por el estudio diagnóstico de

la primera misión del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Dicho estudio buscaba conocer “las condiciones de desarrollo económico y de hacer recomendaciones al gobierno para impulsarlo... La misión también analizó la cuestión educativa y realizó un diagnóstico sobre la función que la educación cumplía en el desarrollo económico” (Molano y Vera, 1982: 135).

El aspecto central que interesó a la misión, “fue la formulación de un plan para elevar el nivel de vida del pueblo colombiano” (Molano y Vera, 1982: 135), comprendido éste, como el consumo de una dieta adecuada para el establecimiento de una buena salud, la posesión de vivienda y esparcimiento de la población en su tiempo libre. Esta misión, conocida como misión Currie<sup>55</sup>, consideró que el problema del nivel de vida y de la ampliación del mercado interno tenía su origen en el nivel de productividad y en la manera como se establecía la distribución.

La educación fue caracterizada por la misión, “como la formación de la capacidad de eficiencia de los trabajadores que hace parte de la productividad per cápita” (Molano y Vera, 1982: 135). Se ubicaba como razonamiento: a mayor educación de una nación, hay una mejor distribución de los recursos productivos; de donde se desprende también: “a mayor entrenamiento de los recursos humanos” el más grande recurso del país, “mayor será la productividad y por ende más equitativa la distribución de la renta del trabajo o salario y el consumo” (Molano y Vera, 1982: 135).

A través de la década de 1950, el universo político y económico de Colombia estuvo saturado de propuestas, diagnósticos, estudios de factibilidad, etc., que pretendían poner al día el desarrollo nacional con el movimiento y las condiciones del desarrollo mundial. En este sentido se comprende la ampliación del cupo de matrícula en educación primaria, principalmente en el área rural, para lo cual el Estado empezó a utilizar los medios

<sup>54</sup> Actualmente no se habla de bloques de poder, sino del capital transnacional que se origina en los países más desarrollados que conforman la Unión Europea y Norteamérica.

<sup>55</sup> En honor al economista canadiense Lauchlin Currie, quien la dirigía.

masivos de comunicación (radio y cine). “Con el fin de obtener el máximo de concurrencia a clases, las vacaciones deberían coincidir con la época de siembra y cosecha; se debían generalizar los restaurantes escolares y el servicio médico, amén de establecer una serie de estímulos como salario diferencial para padres que envían regularmente sus niños al escuela” (Molano y Vera, 1982: 139).

En este proceso de instauración de la planificación del educación, los organismos de cooperación internacional jugaron un papel decisivo, “gracias a las posibilidades de concertación cooperación y financiación que brindó la UNESCO” (Martínez Boom et al, 1988: 13). América Latina con el “Proyecto Principal de la UNESCO” (1956), Asia mediante el “Plan Karachi” (1959 – 1960) y África a través del “Plan Addis Abeba”, desarrollan un proceso de expansión de la educación primaria con el objetivo de que en 1980 todas las poblaciones mínimo hubiesen cursado primaria completa.

Con el primer plan quinquenal de educación formulado en 1975, Colombia a través del Ministerio de Educación (MEN), entra definitivamente en la era de la planificación en educación. En este plan se introducen las matrices económicas en el desarrollo de las políticas educativas, “donde la educación se desarrolla y se perfecciona armónicamente gracias a un orden racional y a una dirección coordinada” (MEN, Oficina de Planeación, 1975: 5). Este plan además de la transformación de la educación primaria, busca mejorar la calidad de la educación normalista, “para lo cual se dio el Decreto 1710 de 1963, en el que se fijan los objetivos de la educación primaria y se unifica el plan de estudios para todas las escuelas del país y el Decreto 1955 del mismo año, por medio del cual se reorganizan los estudios normales estableciendo un nuevo plan de estudios” (Martínez Boom et al, 1988: 13).

El Decreto 1710 plantea los objetivos fundamentales de la educación primaria, establece cinco años de escolaridad en todas las escuelas del país

y modifica el plan de estudios que estaba vigente desde 1950 bajo el Decreto 3468. Por su parte el Decreto 1955 que reforma la educación normalista, retoma las líneas propuestas por el primer plan quinquenal, entre otras la de reconocer el aporte de la psicología (infantil y aplicada) para el desarrollo pedagógico-didáctico, la ciencia de la Educación con sus áreas afines y la “ciencia del aprendizaje”.

Estos Decretos ante todo, lo que hacen es abrir nuevos espacios para el desarrollo y transformación de las prácticas pedagógicas. Dicha transformación se hace efectiva “a propósito de la firma del ‘Segundo convenio adicional’ por parte del gobierno colombiano y el alemán el 25 de noviembre de 1968” (Martínez Boom et al, 1988: 14).

Este convenio también es conocido como la segunda Misión Pedagógica Alemana –segunda ya que hubo una primera en los años veinte-. Se realiza poco a poco un desarrollo de la enseñanza primaria, a través de la elaboración de guías para la ejecución de los nuevos programas escolares, se elabora material didáctico para ayudar a los docentes en su labor didáctica; y se genera una capacitación de maestros en el manejo de las guías de los programas y del material didáctico elaborado.

Es muy importante anotar que las guías introducen plenamente el mecanismo de la planeación al interior del aula de clase. Esta planeación a niveles pequeños tiene una fuente mayor de origen: el Plan Nacional del sector Educativo. La decisión tomada por la planificación tuvo unas consecuencias para la práctica pedagógica y el docente, de tal manera que:

- a. La práctica de la Planificación: que provenía de las concepciones científico-tecnológico-administrativas, se establece en las prácticas educativas.
- b. La práctica del Maestro se ve limitada a la planificación originada en las guías.

- c. La Práctica Pedagógica se fragmenta al parcelar el conocimiento, generando con ello en los alumnos visiones desarticuladas de la realidad. Esto debido a que las guías exigían una planificación parcial por áreas de saber, impidiendo su integración.
- d. Las nociones Derivadas del Positivismo Científico tales como: objetividad, confiabilidad, efectividad y eficacia, ingresan al lenguaje de la educación relacionándolas con las prácticas productivas. De allí se desprende la aparición y la utilización de las llamadas “pruebas objetivas”, ya que éstas “ofrecen una manera de apreciación sistemática del rendimiento de los alumnos, teniendo en cuenta el conocimiento, la habilidad y la comprensión, con el mínimo de subjetividad y el máximo de seguridad” (Martínez Boom et al, 1988: 15 – 16).

Al mismo tiempo que estaba trabajando la Misión Pedagógica Alemana, en el país se estaban realizando otras experiencias de renovación educativa que hacían frente a la problemática nacional de la educación. Dentro de estas otras alternativas, había un trabajo de un grupo de expertos colombianos laborando desde 1968 en el Proyecto Multinacional de Tecnología Educativa de la Organización de Estados Americanos (OEA). Justamente en 1975 cuando van culminando las labores de la Misión Pedagógica Alemana, este grupo del Proyecto Multinacional presenta desde otra perspectiva lo que se conoce como: “Programa Nacional de Mejoramiento Cualitativo de la Educación”.

Dicho programa tenía como antecedentes los esfuerzos del Estado colombiano en la introducción desde 1960 de algunos componentes de Tecnología Educativa en el país. Tanto el SENA con sus prácticas pedagógicas de diseño instruccional para las áreas técnicas en la formación de trabajadores, como la planificación de la enseñanza derivada de las guías del maestro, fueron los medios de introducción de los conceptos y modos de acción de la tecnología instruccional. El Proyecto Multinacional pone en marcha varias experiencias de tecnología educativa, se propone el programa de mejoramiento cualitativo, se reforma el Ministerio de Educación Nacio-

nal (MEN), se reforman los estudios superiores, etc. Así la tecnología educativa inunda el país.

Es importante también señalar como antecedente de la introducción de la tecnología educativa, las recomendaciones que se hicieron en una conferencia internacional en 1967 sobre la “Crisis de la Educación Mundial”, realizada en Williamsburg, Virginia, Estados Unidos y auspiciada por el presidente Lyndon B. Johnson. Dichas recomendaciones fueron recogidas por organismos como la OEA y la UNESCO, de donde surgen muy rápidamente respuestas a través del Proyecto Multinacional y los programas de desarrollo del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) respectivamente.

El uso de la radio<sup>56</sup> y la televisión para la masificación del educación básica, el uso de medios tecnológicos, la introducción de las ciencias de la administración, las reformas de los sistemas nacionales de educación, etc. fueron algunas de las recomendaciones dadas, las cuales fueron plenamente introducidas desde 1968.

En el caso de la televisión educativa, Colombia venía trabajando desde 1967; este servicio inició con el programa de Alfabetización Funcional de Adultos. La radio que ya venía funcionando con las “Escuelas Radiofónicas” de Radio Sutatenza, intensifica su labor con el bachillerato por radio de la Radio Nacional de Colombia. Se fundan los INEM que son instituciones de educación media diversificada, los ITA que son instituciones tecnológicas del sector agropecuario y las CDR que son las Concentraciones de Desarrollo Rural. Tal como se ve, estas innovaciones están ligadas con las concepciones de la teoría del desarrollo, donde la educación de los pueblos es potencial para el incremento productivo y por ende del desarrollo nacional.

Tal como se anotaba anteriormente, el “Programa de Mejoramiento Cualitativo de la Educación” se propone en 1975 y promueve un cambio hacia la renovación curricular y el ejercicio del proceso educativo integral. Las facultades de educación promueven por esta época, de manera coordinada con el “Programa de Mejoramiento Cualitati-

<sup>56</sup> Ya Colombia lo había hecho a través de las Escuelas Radiofónicas de Radio Sutatenza.

vo”, carreras profesionales tales como: administración educativa, psicología educativa, psicopedagogía, psicología y administración. Estos programas académicos tenían como fuentes teóricas la psicología del aprendizaje derivada del experimentalismo y empirismo conductista del modelo propuesto de por Skinner; la enseñanza programada derivada de los modelos de instrucción militar del ejército norteamericano en la época de la posguerra en instituciones como el «Centro de Investigaciones sobre Personal y Entrenamiento de la Fuerza Aérea Norteamericana, la Oficina de Investigaciones sobre Recursos Humanos (HUMRRO) y la Oficina de Investigación Naval de la Armada Norteamericana» (Mockus, 1983: 99); siendo Gagné y Mager algunos de sus instructores; la planificación proveniente de las ciencias de la administración; la teoría y el análisis de sistemas; la psicometría (diagnóstico psicológico a través de pruebas de medición); la estadística descriptiva e inferencial y las ciencias de la educación. Sintetizando, este programa articula las operaciones necesarias para establecer de manera total la tecnología educativa como modelo que en el futuro conduzca los destinos de la educación colombiana.

Tal como se había citado, el programa promovió una reforma del MEN y del Sistema Educativo (Decreto Ley 088 de 1976), lo cual garantizó el implante a gran escala de la tecnología educativa a través del modelo curricular. Este modelo va más allá de las reformas salidas del trabajo de la Misión Pedagógica Alemana, concibe al aparato educativo como un sistema donde la eficiencia y la productividad del mismo es el principal testimonio de su mejoramiento cualitativo. El proceso se instauró de manera gradual poniéndose en práctica entre 1976 y 1984, periodo en el cual recibió muchas críticas del sector intelectual y del magisterio. Tales críticas obligaron a la realización de algunos replanteamientos teóricos de dicho programa, en donde el exclusivo conductualismo Skinneriano se alternó con modelos de Gagné, Bandura y Piaget. Esta feria de enfoques tan disímiles flexibilizó el diseño curricular, permitien-

do la introducción de varias tecnologías educativas y al mismo tiempo fortaleciendo el modelo curricular de planificación educativa.

De otro lado, a partir de 1975 por requerimiento del gobierno nacional, las universidades públicas aumentaron el número de cupos de ingreso para nuevos aspirantes; y con el beneplácito del MEN “las instituciones de educación superior no universitarias empezaron a proliferar, lo que daría origen a la creación de una modalidad más de educación superior (Intermedia Profesional) en el Decreto 80 de reforma universitaria” (Franco, 1988: 28). Esta norma promulgada en 1980 pretendía “democratizar” la universidad, es decir, en palabras del entonces presidente Turbay Ayala: “devolverle la universidad a la universidad”, o “devolverle la universidad al país”, según Guillermo Plaza Alcid –en esa época presidente del Senado-

Con el Decreto 1002 de 1984, se establece el marco legal para que el MEN desarrolle las acciones precisas del “Programa de Mejoramiento Cualitativo de la Educación” en todo el sistema de educación básica. Se determinan aquí las áreas de formación y de conocimiento, la intensidad horaria, los niveles (Básica Primaria, Básica Secundaria, y Media Vocacional) y los lineamientos de la evaluación del proceso educativo.

Posteriormente en 1987 se instaura en la práctica, el régimen de “promoción automática” en Básica Primaria con el fin de incidir en la disminución de la deserción y en la mortalidad académica; y hacer más eficiente el sistema educativo en la relación costo-beneficio.

Con el fin de dar respuesta a los problemas planteados en los últimos años y en consonancia con el Plan de Apertura Económica, el gobierno del presidente Gaviria presentó una política educativa para el período 1991-1994 denominada “Plan de Apertura Educativa 1991-1994”. Dicha política buscó: “Crear un año cero en todas las escuelas públicas del país; garantizar cupos en la primaria a todos los niños de las zonas rurales y de las zonas marginales de las grandes ciudades; pro-

mover una mayor permanencia y calidad educativa en la primaria para los jóvenes en edad de estudiar; y crear un sistema de becas para estudios de maestría y doctorado” (Plan de Apertura Educativa 1991 – 1994, 1991: 25).

Tales objetivos se quieren cristalizar al mismo tiempo, es decir, en consonancia con el desarrollo de la reforma administrativa y financiera en la educación de todo el país. Dicha reforma a su vez está articulada con la reorganización estructural y funcional del Estado Colombiano, donde la reforma de la Constitución, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, se relaciona con un nuevo modelo de gestión administrativa (calidad total) que se pretende establecer en las instituciones públicas.<sup>57</sup>

Resumiendo, se observa en este breve recuento de 40 años de planificación educativa, una constante aparecida desde la Misión Currie que consiste en la relación “Educación-Desarrollo Económico”. Dicha concepción ha llevado a un paulatino enrarecimiento de la formación humanística en favor de la instrucción operativa dentro del sistema educativo; un desarraigo del papel de orientador de formación del maestro, en favor de la función de informador o instructor mecanicista no deliberante del docente; una transformación del binomio Pedagogía-Didáctica en Diseño Curricular

- Diseño Instruccional; un tránsito de una educación como formación para la vida, a una educación como formación para la producción. De otra parte, aunque existió una expansión en el sistema educativo, ésta se detuvo en el periodo de 1975 a 1990, lo cual, en términos economicistas “no potencia internacionalmente el contenido de capital humano de la población colombiana” (Plan de Apertura Educativa 1991 – 1994, 1991: 5), y en términos socioculturales la población de escasos recursos, continúa sin las suficientes oportunidades para poder ejercer el derecho de recibir una educación básica como requisito mínimo de las sociedades modernas. También cabe decir que dentro de este proceso de planificación de la educación se han introducido dos modelos fundamentales: a) El de la Misión Pedagógica Alemana que tendía a la planificación del quehacer pedagógico-didáctico (teoría y práctica; de la enseñanza) al interior del aula y de la escuela; b) El del “Plan de mejoramiento cualitativo de la educación” que introduce plenamente la Tecnología Educativa a todo el sistema educativo nacional. Así mismo dentro de este periodo no ha existido continuidad en las políticas educativas, salvó en el periodo de 1975 a 1990, en los cuales se perfila el encauzamiento de la Tecnología Educativa como modelo que se ajusta a los requerimientos de las políticas nacionales e internacionales en materia económica.

<sup>57</sup> Aquí se comprende mejor la intencionalidad de reforma del Estado, para instaurar el modelo neoliberal de la Apertura Económica

## Bibliografía

- Bejarano, J. (1980). *La Economía en el siglo XX*, en: Manual de Historia de Colombia. Tomo III. Bogotá: Colcultura.
- Camacho, A. y Guzmán, A. (1986). *Política y violencia en la coyuntura colombiana actual*, en: La Colombia de Hoy. Sociología y Sociedad. CIDSE. Universidad del Valle. Bogotá: CEREL.
- Departamento Nacional de Planeación (1991). *Plan de Apertura Educativa 1991 – 1994*. Bogotá.
- Díaz Hocheiter, R. (1975). *Informe del Proyecto para el Primer Plan Quinquenal*, Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, Oficina de Planeación.
- Díaz Alejandro, C. (1980). *Notas sobre la Historia Económica de América Latina*, en: Ensayos sobre la Historia Económica Colombiana. FEDESARROLLO. Bogotá: Presencia.
- Franco, A. (1988). *La transformación académica de la Universidad*, en: Revista Educación y Cultura. N° 15 (julio), CEID FECODE.
- Gaviria, J. y Lesourd, J. A. *La Economía Colombiana. 1958 – 1970*, en: Nueva Historia de Colombia. Economía, Café, Industria, Tomo V. Bogotá, Planeta Colombiana, 1989.
- Gerard, C. y Lesourd, J. A. (1973). *Historia Económica Mundial*, Barcelona, Vicens Vives.
- Martínez Boom, A. et al. (1988). *Reformas de Enseñanza en Colombia: 1960 – 1980*, en: Revista Educación y Cultura No. 15 (julio), CEID FECODE.
- Melo, J. (1978). *La República Conservadora*, en: Colombia Hoy, Bogotá: Siglo XXI.
- Mockus, A. (1983). *Tecnología Educativa y Taylorización de la Educación*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Matemáticas y Estadística,
- Molano, A. y Vera, C. (1982). *Evolución de la Política Educativa en el Siglo XX*. Primera Parte: 1900 – 1958. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional CIUP.
- Palacio, M. (1979). *El café en Colombia 1850 – 1970. Una Historia Económica, Social y Política*. Bogotá: Presencia.
- Perry, G. (1989). *La Economía Colombiana, desde 1970 hasta nuestros días*, en: Nueva Historia de Colombia, Economía, Café, Industria. Tomo V. Bogotá: Planeta.
- Sánchez, G. (1989). *La Violencia: de Rojas al Frente Nacional*, en: Nueva Historia de Colombia. Historia Política 1944 – 1986. Tomo II. Bogotá: Planeta.
- Silva Lujan, G. (1989). *El Origen del Frente Nacional y el Gobierno de la Junta Militar*, en: Nueva Historia de Colombia, Historia Política 1946 – 1986. Tomo II. Bogotá: Planeta.
- Tirado Mejía, A. (1989). *Del Frente Nacional al Momento Actual: Diagnóstico de una crisis*, en: Nueva Historia de Colombia. Historia Política 1946 – 1986. Tomo II. Bogotá: Planeta.